

Doctor:

JUAN JOSÉ PATERNINA SIMANCAS

JUEZ TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SOLEDAD

j03pqccmsoledad@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

RADICACIÓN:	08-7584189003-2021-01001-00
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE:	GASPAR ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ
DEMANDADOS:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S. Y SURA S.A.
ASUNTO:	NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ENLACE DE CONEXIÓN A LA AUDIENCIA VIRTUAL

El suscrito **JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CRUZ**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.140.884.222, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 311.177 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial del Señor **GIAN CARLOS LLINAS SOTO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.140.817368, vecino de esta ciudad, **en su condición de Representante Legal de GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S**, empresa identificada con NIT. 901.444.327- 7, y con correo electrónico: gcllinas@gmail.com, tal como consta en el respectivo certificado de existencia y representación legal; acudo ante su despacho respetuosamente, encontrándome dentro del término legal para presentar Nulidad por INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ENLACE DE CONEXIÓN A LA AUDIENCIA VIRTUAL de fecha 25 de agosto 2022, proferida dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el siguiente orden metodológico.

1. HECHOS

PRIMERO: El señor **GASPAR ANTONIO GUTIERREZ HERNÁNDEZ** interpuso demanda ordinaria laboral contra **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** y **ARL SURA**, la cual correspondió por reparto al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad (Atlántico).

SEGUNDO: El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad, profirió auto admisorio de la demanda de fecha 20 de enero de 2021 en el cual dispuso:

“**PRIMERO: ADMITIR** la presente demanda ordinaria laboral de única instancia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a la pasiva en la forma indicada en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 o en lo contemplado en los artículos 291 y 292 del C.G.P.

Se le conmina a la parte demandada que envíe al correo del juzgado el escrito de contestación de la demanda a fin de aplicar el principio de celeridad y evitar perder el tiempo leyendo la contestación de la misma.

TERCERO: Una vez notificada la pasiva, devolver el expediente al despacho a fin de señalar fecha y hora de audiencia de que tratan los artículos 77 y 80 del C.P.L.".

TERCERO: El doctor Roberto De La Hoz Chavarro, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada: **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S**, siguiendo lo pedido por este despacho judicial, remitió contestación de la demanda el 23 de diciembre de 2021, por medio de su correo electrónico: rodcha7@hotmail.com e informándole al despacho judicial el correo electrónico de la parte demandada: gcllinas@gmail.com , canal digital que, coincide plenamente con el registrado en el certificado de existencia y representación legal aportado por la parte demandante.

CUARTO: Posteriormente, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad, en fecha 14 de junio de 2022, incurrió en error por indebida notificación en este proceso, teniendo en cuenta que, el enlace de conexión a la audiencia virtual se adjuntó en el auto que fija fecha y hora de audiencia notificado por estado, y, como consecuencia, nunca fue recibido el link de conexión a la audiencia por parte de mi representada, pese a que el despacho judicial conocía los canales digitales de notificaciones de la parte demandada, de conformidad con las disposiciones del artículo 3º de la Ley 2213 de 2022.

QUINTO: Que, como consecuencia de lo anterior, la demandada **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** no pudo acceder a la audiencia virtual decretada para ejercer oportunamente su derecho de defensa y contradicción mediante la contestación de la demanda en audiencia, la contradicción de pruebas, y la presentación de las excepciones de mérito a las que habría lugar.

SEXTO: Como quiera que el enlace o link de conexión a la audiencia virtual no fue debidamente notificado al canal digital de la demandada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, se observa que este despacho incurrió en error por indebida notificación al omitir o desentender el canal digital de la parte demandada.

SÉPTIMO: De lo anteriormente expuesto se evidencia que, la falta de notificación es violatoria de los derechos de contradicción y defensa de la parte demandada, y al no realizarse en debida forma, mi defendida no pudo pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la demanda en el momento de la audiencia, lo cual conlleva a que las actuaciones surtidas en este proceso, sean nulas de pleno derecho.

2. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA NULIDAD

2.1. INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ENLACE DE CONEXIÓN A LA AUDIENCIA VIRTUAL

En primer lugar, es preciso manifestar que en el sub-lite ni a la empresa **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** como demandada en el proceso, ni a su apoderado judicial, doctor Roberto De La Hoz Chavarro, les fue notificado el enlace de conexión a la audiencia virtual celebrada el 25 de agosto de 2022, a las 10 AM por medio del aplicativo Lifesize Cloud.

La errada notificación del enlace de conexión a la audiencia virtual surtida por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad, desconocen la garantía Constitucional al debido proceso que asegura, en términos de la Corte Constitucional:

“La integridad de las posibilidades de defensa, que no pueden ser negadas a persona alguna, restringidas ni recortadas, por cuanto, si ello ocurre, se atenta de modo directo contra la justicia...”. De allí que “Factor insustituible del debido proceso es el derecho de defensa, que no sólo debe tener lugar dentro de los procesos penales sino en toda actuación judicial o administrativa, con el objeto específico de impedir que la decisión de la autoridad se produzca sin la participación activa de quien pueda tener interés en ella, de lo cual resulta que la falta o disminución de las posibilidades de defensa, en cualquier sentido, repercuten necesariamente en la inconstitucionalidad de lo actuado”¹.

Con el fin de garantizar el derecho de defensa dentro de una actuación judicial o administrativa se ha instituido el mecanismo de las notificaciones, que asumen formas y formalidades diversas, cuya finalidad es la de vincular a los sujetos procesales con interés jurídico para intervenir en el respectivo proceso y enterarlos de las diferentes diligencias y actuaciones que en él se surten.

Sobre el tema de las notificaciones ha expresado la Corte Constitucional²:

“Desde el punto de vista constitucional importa dejar en claro que la **notificación**, entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta.”

¹ C. CONST. T-043 DEL 7 DE FEBRERO DE 1996.

² Sentencia T-099/95. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Entonces, la notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente -con fecha cierta- en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía.

Con referencia a la importancia de la notificación en las actuaciones, la Corte Constitucional en Sentencia T-002 de 2019, ha establecido lo siguiente:

“La notificación cumple una triple función dentro de la actuación: (i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado que mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la administración; (ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción; y (iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar al momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes”.

Así las cosas, se deben agotar todos los medios dispuestos por el ordenamiento jurídico vigente para notificar, dentro de la oportunidad legal, a quien resulte involucrado en un proceso ordinario laboral de única instancia, y, partiendo del hecho que, las autoridades judiciales ejercen una función pública, reguladas de manera genérica por el Código General del Proceso (CGP) y por la Ley 2213 de 2022, se deben agotar todos los medios de notificación dispuestos en las referenciadas disposiciones normativas.

La falta probada de notificación, en especial la de aquellos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de trámite.

De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en torno a las decisiones que adoptan.

Así mismo, se estima que, en el presente proceso, conforme a lo enseñado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-491 del 02 de Noviembre de 1995³, se transgredió el Artículo 29 de la Constitución Política de 1991, permitiéndome seguidamente insertar su tenor literal: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...”.

Además de la norma supralegal precedente, es aplicable al presente asunto lo dispuesto en el numeral 8º del Artículo 133 del Código General del Proceso, en el cual se expresa:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código (...)”. (Subrayado fuera de texto original).

Entonces, como la Ley no ha consagrado la nulidad procesal por meros aspectos formalistas, sino con el fin de proteger los derechos vulnerados con la ocurrencia de la irregularidad, cabe afirmar que la causal consistente en falta de notificación del link de conexión de la audiencia virtual a la parte demandada, es violatoria del debido proceso y del derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que, estamos frente a un proceso ordinario laboral de única instancia en el que la contestación de la demanda se desarrolla en audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Laboral. En consecuencia, es procedente que se decrete la nulidad solicitada.

Lo anterior, aunado a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, “Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención

³ En esta oportunidad la Honorable Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell, manifestó que: “además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el artículo 29 de la Constitución , según el cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente a lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta”.

a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones", en cuyos artículos 2º y 3º establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 2. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, cuando se disponga de los mismos de manera idónea, en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias.

(...)

PARÁGRAFO 1. Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos. (...)" (Subrayado fuera de texto original).

De conformidad con la referenciada disposición normativa, NO es admisible que NO se haya enviado el enlace de conexión a la audiencia virtual desarrollada el 25 de agosto de 2022, a las 10 AM al correo electrónico gcllinas@gmail.com de la parte demandada: **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** o del apoderado judicial: rodcha7@hotmail.com, sobre todo, si se tiene en cuenta que los citados canales digitales son fácilmente verificables por diversos medios, entre ellos: el certificado de existencia y representación de la empresa, el cual obra como prueba aportada por la parte demandante en el expediente y los intercambios de comunicaciones vía correo electrónico que se mantuvieron entre la parte demandada y este despacho judicial.

Por su parte, el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, respecto al deber de los sujetos procesales de adelantar las notificaciones de todas las actuaciones con apoyo de los medios tecnológicos, ha señalado lo siguiente:

"ARTÍCULO 3. DEBERES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN RELACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Es deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los

memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial

Identificados los canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las actuaciones y desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior". (Subrayado fuera de texto original).

Entonces, teniendo en cuenta la referida disposición normativa, en el proceso objeto de estudio en este incidente de nulidad, no se garantizó el uso adecuado de las notificaciones vía correo electrónico, tal como lo establece la norma, y, en consecuencia, se vulneraron los principios de publicidad, debido proceso y contradicción de la prueba.

2.2. VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

De acuerdo con los principios orientadores del derecho procesal laboral, todas las actuaciones judiciales se deberán llevar a cabo con sujeción a la Constitución y especialmente con arreglo a los principios de oralidad, publicidad, debido proceso y defensa.

En ese entendido, el debido proceso consagra un conjunto de principios y garantías sustanciales que se concretan de maneras diferenciadas según el tipo o clase de procedimiento en que deban aplicarse.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-051 de 2016, ha precisado lo siguiente:

"Las garantías establecidas en virtud del debido proceso, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la Ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso". (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de la Constitución, y de conformidad con los artículos 2, 3 y 7 de la Ley 2213 de 2022, es preciso que el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad, declare la nulidad de su propia actuación bajo el entendido que, la ausencia de notificación en debida forma del link de conexión a la audiencia virtual desarrollada el 25 de agosto de 2022, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada en el asunto objeto de litigio.

2.3. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

El principio de publicidad se encuentra consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el cual señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento entre otros, en el principio de "publicidad", el cual se evidencia en dos dimensiones:

I) El derecho que tienen las personas directamente involucradas, al conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, la cual se concreta a través de los mecanismos de comunicación y la segunda, como el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad de conocer las actuaciones de las autoridades y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan conforme a la Ley.

II) El principio de publicidad, visto como instrumento para la realización del debido proceso, implica la exigencia de proferir decisiones debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley, con el fin de que puedan ejercer sus derechos a la defensa y contradicción.

Entonces, es conveniente sostener que el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas, pues sólo si se conocen las decisiones se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportar pruebas en su defensa y la de impugnar fáctica y jurídicamente las acusaciones y señalamientos en audiencia judicial.

Así las cosas, para el caso de la referencia, tenemos que el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad (Atlántico), ha incumplido con los requisitos de publicidad en razón a que, no dio a conocer el link de acceso a la audiencia virtual por medio del canal digital de la parte demandada, pese a conocerlo y haber sido aportado en el escrito de la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 y 7 de la Ley 2213 de 2022, y, en consecuencia, se vulneró el derecho al debido proceso y el principio de publicidad que le asiste a **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** como parte demanda en el litigio.

3. OPORTUNIDAD PARA ALEGAR LA NULIDAD

Manifiesto a usted que mi representada está en oportunidad de Ley para invocar la nulidad sub-judice, teniendo en consideración la autorización otorgada en los incisos 1º y 2º del artículo 134 del C.G.P., cuyo texto reza:

“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal.

El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias.

La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento solo beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio." (subrayado fuera de texto).

Así, las cosas, en el proceso de la referencia le asiste el deber al operador judicial de declarar la nulidad de lo actuado en razón a la indebida notificación del del enlace de conexión a la audiencia virtual celebrada el 25 de agosto de 2022, pues, nos encontramos frente a incumplimientos evidentes y notorios de las disposiciones consagradas en la Ley 2213 de 2022.

Como consecuencia de lo anterior, es fácil apreciar el hecho de que se anexó el enlace de conexión a la audiencia virtual en el auto que fijó fecha para la realización de esta diligencia judicial y cuya notificación se limitó a la publicación por estado, lo cual no materializa materializan los presupuestos del acceso a las audiencias con el uso de las TIC, de 7° de la Ley 2213 de 2022, vulnerando así el derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 constitucional.

Siguiendo con lo anterior, es preciso referenciar el artículo 7° Ley 2213 de 2022, el cual establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 7. AUDIENCIAS. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. No se requerirá la autorización de que trata el parágrafo 20. del artículo 107 del Código General del Proceso.

No obstante, con autorización del titular del despacho, cualquier empleado podrá comunicarse con los sujetos procesales, antes de la realización de las audiencias, con el fin de informarles sobre la

herramienta tecnológica que se utilizará en ellas o para concertar una distinta (...)" (Subrayado fuera de texto original).

Entonces, en resumen de todo lo anterior, como a la empresa **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** como demandada en el proceso, ni a su apoderado judicial, doctor Roberto De La Hoz Chavarro, les fue notificado en debida forma el link de conexión a la audiencia virtual de única instancia, la consecuencia jurídica de tal desidia ha generado una situación que menoscaba los derechos fundamentales de la parte demandada y le resta legalidad a las actuaciones adelantadas por este despacho desde el momento en que se materializó la nulidad, esto es, desde el instante en que se no se garantizó el acceso a la audiencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 2213 de 2022.

Ante lo planteado con anterioridad, es pertinente señalar que, la consecuencia jurídica negativa e inmediata de la violación del derecho al debido proceso, se evidencia con la ausencia de contestación de la demanda en audiencia (oportunidad procesal adecuada en procesos ordinarios laborales de única instancia), la ausencia de presentación y sustentación de excepciones previas y de mérito en la diligencia judicial, y la falta de pruebas que puede aportar **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** en el proceso de la referencia con el objetivo de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Al respecto, es pertinente señalar lo consagrado por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, a saber:

"...Las sentencias T-267 de 2009 y la T-666 de 2015, reiteraron que el desconocimiento del procedimiento debe presentar unos rasgos adicionales para configurar el defecto estudiado: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado" (negrilla y subrayado fuera de texto) (Sentencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)

Por su parte, la Sentencia C-670 de 2004 resaltó lo siguiente:

"La Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena en la Sentencia C-783 de 2004, en la que indicó que la notificación judicial es el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por el juez. En consecuencia, tal actuación constituye un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional establecido en el artículo 228 constitucional.

Por su parte, en la Sentencia T-081 de 2009, la Honorable Corte Constitucional señaló que en todo procedimiento se debe proteger el derecho de defensa, cuya primera garantía se encuentra en el derecho que tiene toda persona de conocer el desarrollo de un proceso en su contra en virtud del principio de publicidad consagrado en el artículo 228 constitucional.

Así las cosas, la notificación judicial constituye un elemento básico del derecho fundamental al debido proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer su derecho de defensa.

En conclusión, todas las consecuencias procesales negativas de ausencia de contestación de la demanda en audiencia, no presentación de excepciones y no controvertir y aportar pruebas por parte de **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** se dan por situaciones ajenas a los deberes procesales de la parte demandada, pues, tales omisiones que afectan los derechos de la accionada en este proceso, son producto de una indebida notificación del enlace de conexión a la audiencia virtual celebrada el 25 de agosto de 2022, a las 10 AM por medio del aplicativo Lifesize Cloud, lo cual, a fin de cuentas, debe dar lugar a acceder a la nulidad procesal aquí solicitada, en razón a que, se están afectando derechos e intereses de una parte procesal por factores ajenos a su responsabilidad, o dicho en otros términos, la falta de actuación de **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S** en este proceso NO obedece a una omisión de los derechos y deberes procesales que le asisten, sino a un error en que ha incurrido el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SOLEDAD al momento dar a conocer el link de acceso a la audiencia virtual.

4. PETICIÓN

Señor Juez, por todo lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente que DECLARE la nulidad de lo actuado en este proceso con posterioridad al auto que fija fecha y hora de audiencia por falta de notificación del link de acceso a la mencionada diligencia judicial a la parte demandada en este proceso, esto es, de **GC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S**, por encontrarse estructuradas las causales contenidas en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, lo cual genera nulidad absoluta del proceso de la referencia al incurrir en vulneración de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.

5. ANEXOS

5.1. Poder para actuar y anexos de envío y aceptación.

6. NOTIFICACIONES

- 6.1. Para todos los efectos legales, como bien sabe este despacho judicial, tal como se encuentra constatado en el expediente del proceso, la demandada recibe notificaciones al correo electrónico: gcllinas@gmail.com.
- 6.2. El suscrito recibe notificaciones al correo electrónico: joseangel1528@hotmail.com
- 6.3. La parte demandante recibe notificaciones en el correo electrónico: gestionjuridica10@outlook.com
- 6.4. El apoderado de la parte demandante, señor ARGELIO ANTONIO MARTINEZ POLO, recibe notificaciones al correo electrónico: argeliomartinezpolo@hotmail.com
- 6.5. ARL Sura recibe notificaciones al correo: contactenosarl@suramericana.com.co

Del señor Juez, atentamente,



JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CRUZ
C.C. 1.140.884.222
T.P 311.177 del C. S de la J.